

GACETA OFICIAL

SEGUNDA EPOCA

PANAMA, 12 DE FEBRERO DE 1913

NÚMERO 1865

PODER EJECUTIVO

Presidente de la República,
BELISARIO PORRAS.
Cajero Oficial: Residencia Presidencial.

Ministro de Gobierno y Justicia,
FRANCISCO FILÓS.
Cajero Oficial: Palacio de Gobierno, segundo piso, Calle 3ª, Casa particular: Calle 14 Oeste N° 183.

Ministro de Relaciones Exteriores,
ERNESTO T. LEFEVRE.
Cajero Oficial: Palacio de Gobierno, tercer piso, Avenida Central. Casa particular: Calle 11 N° 183.

Ministro de Hacienda y Tesoro,
EUSEBIO A. MORALES.
Cajero Oficial: Palacio de Gobierno, tercer piso, Avenida Central. Casa particular: Avenida Central N° 9.

Ministro de Instrucción Pública,
GUILLERMO ANDREVE.
Cajero Oficial: Palacio de Gobierno, tercer piso, Avenida Central. Casa particular: Calle 9 N° 7.

Ministro de Fomento,
RAMÓN F. ACEVEDO.
Cajero Oficial: Palacio de Gobierno, primer piso, Avenida Central. Casa particular: Avenida B. N° 81.

EDUVINA A. DE AROSEMENA
EDITOR OFICIAL
Oficina: Avenida Central, número 37.

PERMANENTE.
Los documentos publicados en la GACETA OFICIAL, se considerarán oficialmente comunicados para los efectos legales y del servicio.

El Subsecretario de Gobierno y Justicia,
ENRIQUE L. HURTADO.

REGLEMENTO.

El siguiente reglamento se observará en los papeles que tengan relación con la Presidencia de la República:
Habrá Cabildo de Gabinete los martes y los viernes de 10 a. m. a 12 m.
Los miembros de la Asamblea Nacional y los funcionarios públicos que tengan asuntos que tratar con el Presidente, según recibidos todos los días de 10.30 a 11.30 a. m. con excepción de los martes y viernes, en que hay Consejo de Gabinete.
Las personas que deseen ver al Presidente para hacerle peticiones o ponerle quejas relacionadas con el servicio público, serán recibidas de 2 a 4 p. m., no pudiendo durar las entrevistas más de cinco minutos para cada persona, con el objeto de poder atender a todos los solicitantes.
Las personas que deseen entrevistas especiales con el Presidente, deben solicitarlas al suscrito por teléfono o por escrito.
El Secretario del Presidente,
J. A. ARANGO.

AVISO.

En la Tesorería General de la República se aceptan suscripciones a la GACETA OFICIAL, sobre las siguientes bases de pago anticipado:
Por un año..... B. 6.00
Por seis meses..... 3.00
Por tres meses..... 1.50
El periódico se repartirá a domicilio a los suscriptores, el mismo día de salida.
En la misma Oficina y en las respectivas Administraciones Provinciales de Hacienda se encuentran de venta: La Ley 19 de 1909 sobre reformas civiles y judiciales a B. 0.25 el ejemplar.
El folleto que contiene en español e inglés la Ley 19 de 1907 sobre adjudicación de tierras baldías de la República, a B. 0.25 el ejemplar.
Las disposiciones vigentes sobre adjudicación y administración de tierras baldías e indultadas a B. 1.00 el ejemplar.
Los mapas descriptivos de las tierras situadas en las márgenes del Río Chagres a B. 0.15 cada ejemplar.
El Cajero Jefe,
J. M. ALZAMORA.

AVISO.

En la Tesorería General de la República se vende el Círculo Marítimo para el Puerto de Panamá, a razón de veinticinco centavos de balboa (B. 0.25) el ejemplar.
El Cajero Jefe,
J. M. ALZAMORA.

CONTENIDO

PODER LEGISLATIVO

Dienerarios de la Asamblea Nacional..... 4050
Ley 13 de 1913 de 27 de Enero, sobre Registro Público..... 4055
Acta de la sesión extraordinaria del día 21 de Enero del 1913..... 4057

PODER EJECUTIVO NACIONAL

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Estado de Caja de la Tesorería General de la República el día 29 de Enero de 1913..... 4058
Avances Oficiales..... 4058

PODER LEGISLATIVO.

DIGNATARIOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Presidente.
Doctor **CIRO L. URRUTIA.**
1er. Vice-Presidente,
Don **ROSENDO HERRERA.**
2º Vice-Presidente,
Don **J. A. HENRIQUEZ.**
Secretario,
Don **ANTONIO ALBERTO VALDÉS.**
Subsecretario,
Don **ANTHAL MARTINEZ.**

LEY 13 DE 1913,

(DE 27 DE ENERO),

sobre Registro Público.

La Asamblea Nacional de Panamá

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales.

Artículo 1º El Registro Público que se establece por esta ley tiene los objetos siguientes:

1º Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales constituidos en ellos;

2º Dar eficacia y publicidad a los actos y contratos que trasladen o mudan el dominio de los mismos bienes raíces o le imponen gravámenes o limitaciones al dominio de éstos;

3º Establecer de modo fehaciente todo lo relativo a la capacidad civil de las personas, a la constitución, transformación o extinción de personas jurídicas, de sociedades colectivas y compañías anónimas, a toda clase de mandatos generales y a todas las representaciones legales;

4º Dar mayores garantías de autenticidad y seguridad de los títulos, actos o documentos que deben registrarse.

Artículo 2º El Registro Público comprende tres secciones, así:

1º El Registro de la propiedad para la inscripción de los títulos que trasladen, modifiquen o limiten el dominio de los bienes inmuebles;

2º El Registro de hipotecas, en el cual están comprendidos todos los gravámenes sobre la propiedad inmueble;

3º El Registro de personas.

Artículo 3º El Registro es público y puede ser consultado libremente por cualquiera persona.

Artículo 4º Sólo pueden inscribirse en el Registro los títulos que consten de escritura pública, de sentencia o auto ejecutoriado o de otro documento auténtico expresamente determinado por la ley.

Artículo 5º La inscripción podrá pedirse por el Notario mismo que ha otorgado la escritura o por quien tenga interés en asegurar el derecho que se trata de inscribir, o por su representante o apoderado.

Se presume que quien presenta el documento tiene poder para ese efecto.

Artículo 6º Pueden constituirse derechos reales o gravámenes por quien tenga inscrito su derecho para ello en el Registro, o por quien lo adquiere en el mismo instrumento de su constitución.

Artículo 7º Toda inscripción que se haga en el Registro Público, se presará:

1º El día y la hora en que el documento ha sido presentado al Registro, y el nombre de la persona que lo ha presentado;

2º El nombre y la residencia de la autoridad judicial o del Notario que autorice el título;

3º La naturaleza del título que deba inscribirse y su fecha.

Artículo 8º Si en alguna inscripción se omita expresar cualquiera de las circunstancias generales o especiales exigidas por la ley, o si se expresaren de distinto modo de como aparecen en el título, podrá rectificarse en cualquier tiempo a solicitud del interesado, pero dicha rectificación no perjudica a terceros sino desde su fecha.

Si por omisión de circunstancias o por obscuridad ó inexactitud al expresarse, fuere inducido en error un tercero, el Registrador será responsable de los daños y perjuicios.

Artículo 9º Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos, no perjudican a tercero sino desde la fecha de su presentación en el Registro. Se considerará como tercero aquel que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción.

Artículo 10. La inscripción no le da validez a los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten o otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o renueve el derecho del otorgante en virtud del título no inscrito o de causas implícitas o de causas que, aunque explícitas, no consten en el Registro.

Artículo 11. Las acciones de rescisión o resolución no perjudican a tercero que haya inscrito su derecho.

Se exceptúan, sin embargo, los casos siguientes:

1º Las acciones de rescisión o resolución que deban su origen a causas que, habiendo sido extinguidas expresamente por las partes, consten en el Registro;

2º Las acciones rescisorias de enajenaciones en fraude de acreedores en los casos siguientes: 1º cuando la segunda enajenación ha sido hecha por título lucrativo; 2º cuando el tercero haya tenido conocimiento del fraude del deudor.

CAPÍTULO II

Del Registro de la Propiedad.

Artículo 12. En la primera sección del Registro Público se inscribirán:

1º Los títulos de dominio sobre inmuebles;

2º Los títulos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales diversos del de hipoteca.

Los títulos que versen sobre anticresis ó arrendamiento de inmuebles, pueden ó no inscribirse, pero sólo perjudicarán a tercero si hubieren sido inscritos.

Artículo 13. Toda inscripción que se haga en el Registro de Propiedad, relativa a inmuebles, expresará, además de las circunstancias de toda inscripción, las siguientes:

1º La naturaleza, situación, cabida, linderos y nombre del inmueble objeto de la inscripción, o el cual afecte al derecho que deba inscribirse;

2º La naturaleza, valor, extensión, condiciones y cargas de cualquiera especie del derecho que se inscriba;

3º La naturaleza, extensión, condiciones y carga del derecho sobre el cual se constituye el que sea objeto del gravamen;

4º El nombre, apellido, domicilio, y calidades de la persona a cuyo favor se haga la inscripción y los de aquella que transmita el derecho que deba inscribirse.

En las demás inscripciones relativas a la misma finca, no se repetirá las circunstancias del ordinal 1º, pero se hará referencia de las modificaciones que indique el nuevo título y del asiento en que se halle la inscripción.

Artículo 14. Las servidumbres se harán constar en la misma inscripción de propiedad del predio dominante y del sirviente.

Artículo 15. Inscrito un título traslativo del dominio de inmuebles, no podrá inscribirse ningún otro que no perjudique el derecho inscrito.

Artículo 16. De toda inscripción que se haga en las otras secciones del

Registro Público, relativas a un inmueble, se tomará nota en la inscripción del Registro de la Propiedad.

Artículo 17. Todo inmueble que se inscriba en el Registro de la Propiedad, será designado con un número, y con ese número será conocido y determinado dicho inmueble en las certificaciones y copias que se expidan y en los catastros para el cobro de los impuestos.

Artículo 18. La persona que construya o edifique sobre terreno propio o en virtud de contrato con el dueño del suelo, podrá inscribir su título constitutivo de dominio, de conformidad con las reglas siguientes:

1º Exhibir ante el Juez de lo Civil del respectivo Circuito el título o contrato referente al terreno, y comprobar, con declaraciones de testigos recibidas con asistencia del Fiscal, que el edificio ha sido hecho a sus expensas y que le pertenece en propiedad.

2º De la correspondiente solicitud se dará conocimiento al público por medio de un edicto que se fijará en la Secretaría del Juzgado en un lugar destinado expresamente para la fijación de los edictos de esta clase. En dicho edicto se expresará el nombre del solicitante, la situación del inmueble, sus linderos y su nombre.

En el mismo edicto se citará a los que se crean con derecho al inmueble para que se presenten a hacerlo valer breve y sumariamente. El edicto permanecerá fijado durante treinta días, y copia de él se publicará por tres veces en uno de los diarios de la Capital de la República, a partir de la fijación del edicto.

3º El Juez, una vez vencido el término del edicto de emplazamiento, declarará que el solicitante tiene el derecho que reclama y ordenará la inscripción, si comprobare las circunstancias expresadas en la regla 1ª y no se hubiere hecho oposición a la solicitud de inscripción, ó si hecha tal oposición resultare infundada.

4º En las mismas diligencias del título constitutivo se fijará el valor de la propiedad, por peritos nombrados uno por el solicitante y otro por el Fiscal; otro por el Juez para el caso de discordia. Sobre ese valor se pagarán los derechos de registro, como si se tratase de una enajenación.

Artículo 19. El propietario que careciere de título inscrito de dominio, podrá inscribir su derecho, justificando previamente su posesión de más de diez años. Esta justificación podrá hacerse ante el Juez de lo Civil del Circuito, con asistencia del Fiscal, pudiendo hacer uso el solicitante de todos los medios de prueba establecidos en el Código Judicial y observándose en los demás las reglas establecidas en el artículo anterior. Si el Juez declara que la posesión pacífica existe con anterioridad de diez años, ordenará la inscripción.

La inscripción de posesión no perjudicará en ningún caso al que tenga mejor derecho a la propiedad del inmueble, aunque su título no haya sido inscrito; pero subsistirá mientras no se mande cancelar por sentencia del Juez competente.

Capítulo III Del Registro de Hipotecas.

Artículo 20. En el Registro de Hipotecas se inscribirán los títulos en que se constituya, modifique ó extinga algún derecho de hipoteca ó otro gravamen sobre inmuebles.

Artículo 21. El asiento que se haga en este Registro, debe expresar, además de las circunstancias generales:

1º Los nombres, apellidos, domicilios y calidades del acreedor y del deudor.

2º La fecha y naturaleza del contrato a que accede la hipoteca, ó el respectivo gravamen; el archivo en donde se encuentre ese contrato y el monto del crédito y sus plazos y condiciones. Si el crédito causa interés, la tasa de ellos y la fecha desde cuando deben correr.

3º Cita del número que tenga la suya hipotecada ó gravada en el Registro de la Propiedad, y tomo y folio en que se halle su descripción ó la naturaleza del derecho real hipotecado ó gravado, con las demás circunstancias que lo caractericen.

Capítulo IV Del Registro de las Personas.

Artículo 22. En la sección de personas del Registro Público se inscribirán:

1º Las sentencias, los autos ejecutoriados y los documentos auténticos en virtud de los cuales resulte modificada la capacidad civil de las personas.

2º La sentencia en que se declara la insolvencia ó quiebra;

3º La sentencia por la cual se declara una guarda;

4º Los documentos públicos y auténticos en que se constituya una persona moral, ó se le dé representación;

5º Todo poder general;

6º Las capitulaciones matrimoniales cuando en ellas se haga mención de bienes raíces.

Artículo 23. El asiento en el Registro de personas expresará, además de las condiciones de todo asiento, la especie de incapacidad, facultad ó derecho que resulte del título, con indicación del nombre, apellido y veindad de las personas que aparezcan en el documento.

Capítulo V De las inscripciones provisionales.

Artículo 24. Además de las inscripciones definitivas de que tratan los capítulos anteriores, habrá también inscripciones provisionales que harán en las respectivas secciones del Registro Público cuando se trate de los siguientes documentos ó actos judiciales:

1º Las demandas sobre dominio de bienes inmuebles y cualesquiera otras que versen sobre propiedad de derechos reales, ó en los cuales se pida la constitución, declaración, modificación, limitación ó extinción de cualquier derecho real sobre inmuebles.

2º Las demandas sobre cancelación ó rectificación de asientos del Registro.

3º Las demandas sobre declaración de presunción de muerte, incapacidad de administrar, y cualesquiera otras que traten de modificarse la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes.

4º Los autos de secuestros de bienes raíces. Esta inscripción será válida por el tiempo que dispongan las leyes procedimentales y será cancelada de acuerdo con ellas.

5º El embargo que se haga en bienes raíces.

6º Los títulos cuya inscripción no pueda hacerse definitivamente por faltas subsanables. Esta inscripción produce los efectos de la inscripción definitiva durante seis meses y quedará de hecho cancelada si dentro de ese término no se subsana el defecto.

Es falta subsanable la que afecta la validez del título sin producir necesariamente la nulidad de la obligación en él constituida ó la de no hallarse anteriormente inscrito el dominio ó derecho de que se trata a favor de la persona que lo transfiera ó grave.

Artículo 25. Las inscripciones provisionales a que se refieren los casos 1º, 2º y 3º del artículo anterior, se convierten en definitivas mediante la presentación en el Registro de la respectiva sentencia ejecutoriada.

La del caso 4º cuando se subsane el defecto dentro de los seis meses prefijados, ó desaparece el motivo por el cual no se hizo la inscripción definitiva.

Artículo 26. La inscripción provisional, como la definitiva, surte efectos respecto de terceros desde la fecha de la presentación del título.

Artículo 27. Cuando se trate de inscripciones provisionales en los casos de los Incisos 1º, 3º, 4º y 5º del artículo 24, y las demandas respectivas cursen ante Jueces que no residan en la Capital de la República, se tendrán como presentados al Registro los documentos ó actos judiciales que

la ley de procedimientos requiera desde el día y la hora en que tales documentos sean depositados en la Oficina de Correos ó en la Oficina Telefónica del lugar en donde funcione el Juzgado, y desde la fecha de ese depósito se tendrá como hecha la inscripción.

Capítulo VI De la cancelación del Registro.

Artículo 28. Las inscripciones en el Registro de Propiedad y en el de Hipotecas no se extinguen, en cualquier caso, sino por su cancelación ó por la inscripción de la transmisión del dominio ó derecho real inscrito, a favor de otra persona.

Las hipotecas inscritas ó detenidas por defectuosas, que aparezcan vendidas por el tiempo que la ley civil establece para la prescripción de las acciones consiguientes, sin que del Registro resulte interrupción de la prescripción, no surtirán efectos contra terceros desde la fecha en que tal prescripción es alegable, y el Registrador, al inscribir nuevos títulos relativos a la finca, hará caso omiso de tales gravámenes.

Artículo 29. Podrá pedirse y deberá ordenarse la cancelación total de una inscripción en los casos siguientes:

1º Cuando se extinga el inmueble objeto de la inscripción ó derecho real inscrito.

2º Cuando se declare nulo el título en virtud del cual se ha hecho la inscripción.

Artículo 30. Podrá pedirse y deberá decretarse la cancelación parcial cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripción, ó cuando el derecho real se reduzca a favor del dueño de la finca gravalada.

Artículo 31. No se cancelará una inscripción sino en virtud de auto ó sentencia ejecutoriada ó de escritura de documento auténtico en el cual expresen su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción ó sus causa habientes ó representantes legítimos.

Artículo 32. Cuando la inscripción provisional se refiera a decretos de embargo ó secuestro ó a demanda judicial, se cancelará en virtud de la sentencia ejecutoriada en que se decreta el desembargo ó el levantamiento del secuestro, ó se absuelva al demandado de la demanda, ó el auto en que se declare la caducidad de la instancia.

Artículo 33. En el registro de personas las inscripciones se cancelarán total ó parcialmente en virtud de documento público ó auténtico en que conste legalmente que ha cesado la incapacidad, ó que han cesado los hechos que han modificado las facultades administrativas objeto de la inscripción.

Artículo 34. Podrá declararse nula la cancelación en los casos siguientes:

1º Cuando se declare falso ó nulo el título en virtud del cual fue hecha la inscripción.

2º Cuando se haya verificado por error ó fraude.

En ambos casos la nulidad sólo perjudicará a terceros posteriores, cuando se haya inscrito provisionalmente la demanda establecida para que se declare en juicio.

Capítulo VII Efectos del Registro.

Artículo 35. Ninguno de los títulos sujetos a la inscripción ó registro, según las disposiciones que preceden, hará fe en juicio ni ante ninguna autoridad, empleado ó funcionario público si no ha sido inscrito en la Oficina de Registro Público que se crea por esta ley, a menos que el referido título sea invocado por terceros como prueba en juicio contra alguna de las partes que intervinieron en el acto ó contrato no inscrito, ó contra sus herederos ó representantes.

Artículo 36. Los títulos de dominio de inmuebles y los en que se constituyan, reconozcan, modifiquen ó extingan derechos de usufructo, uso, habitación, servidumbre ó otros derechos reales que estén ya registrados en las Oficinas de Registro, así como a la expedición de esta ley, deberán ser inscritos ó incorporados en la Oficina de Registro Pública dentro del plazo de un año, contado desde la fecha en que la ley entre a regir.

El mismo plazo se fija para la reinscripción ó incorporación de los títulos de hipoteca, y pasado el año, todos los títulos mencionados en este artículo quedarán bajo la sanción establecida en el artículo anterior.

Capítulo VIII De la organización del Registro Público.

Artículo 37. Desde la fecha en que el Poder Ejecutivo lo disponga, de acuerdo con esta ley, quedarán suprimidas las Oficinas de Registro que funcionan en los actuales Circuitos Judiciales y Notariales y el Registro quedará centralizado en una oficina denominada Registro Público que funcionará en la Capital de la República.

Artículo 38. El Registro Público estará a cargo de un empleado que se denominará Registrador General, que será nombrado por el Presidente de la República y tendrá en sus funciones todo el tiempo de su buena conducta.

También habrá el personal subalterno que fuere necesario.

Artículo 39. Para ser Registrador General se necesitan las mismas calidades que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 40. El Registrador General tiene la facultad de calificar la legalidad de los títulos que se le presenten para su inscripción, y en consecuencia puede negar ésta si las faltas que adolecen los títulos los invalidan absolutamente, ó simplemente suspenderla si ellas fueren subsanables.

La resolución del Registrador negando que suspendiendo la inscripción, debe expresar los motivos ó razones en que se funde, y se considerará como una sentencia de primera instancia.

Artículo 41. Si el interesado no se conformare con la calificación del Registrador General, podrá interponer apelación para ante la Corte Suprema de Justicia. Este recurso se concederá inmediatamente y la Corte resolverá, con audiencia del interesado y dentro de tres días a más tardar, si debe hacerse o no la inscripción ó anulación pedida.

Artículo 42. El Registrador General es responsable civilmente por los daños y perjuicios que cause a los particulares. Las acciones para la reparación de ellos presentarán un año después de ocurrido el hecho que los hubiere originado. De tales perjuicios responderá el Registrador con una fianza de cinco mil balboas y con sus demás bienes.

Artículo 43. El Registrador tiene también responsabilidad administrativa por infracciones que den lugar a una corrección disciplinaria. Esta consistirá en una multa de uno a trescientos balboas, que le imponga el Presidente de la República de oficio ó en virtud de querrela fundada de algún particular ó de un funcionario público.

Artículo 44. El Registrador General guardará de un sueldo mensual de doscientos balboas (\$200.00) y el Poder Ejecutivo podrá hacer el nombramiento del empleado y pagarle hasta tres meses de sueldo antes de que comience a ejercer sus funciones, para que pueda estudiar en el exterior la organización de la oficina y los mejores métodos ó sistemas que deban implantarse en ella.

Al nombrado se le pagarán los gastos de transporte y un suplemento igual a las dos terceras partes del sueldo durante el tiempo de la ausencia.

Artículo 45. El Poder Ejecutivo queda facultado:

1º Para fijar la fecha en que debe principiar la vigencia de esta ley;

2º Para dictar un decreto orgánico de la Oficina de Registro Público, en el cual se establezca el personal subalterno de ella, se determinen las funciones de cada empleado y se reglamente por completo y detalladamente el funcionamiento de la nueva institución, teniendo en cuenta su importancia y sus fines.

Artículo 46. Los empleados subalternos de la Oficina de Registro deberán ganar mensualmente los sueldos siguientes:

Los Jefes de Sección, cien balboas B.100.00

Los Oficiales séptima y cinco balboas 75.00

El Portero tercera balboas 30.00

Artículo 47. Desde el día en que esta ley comience a regir, quedarán derogadas todas las disposiciones del Título 43 del Libro Cuarto del Código Civil y de las leyes adicionales y reformatorias del mismo Título que le sean contrarias.

Dada en Panamá, a veinticuatro de Enero de mil novecientos trece.

El Presidente,

CIBO L. URRUTIA.

El Secretario,

Anto. Alberto Valdés.

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Panamá, Enero veintiseis de mil novecientos trece.

Publíquese y ejecútese.

BEINISARIO PORRAS.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

FRANCISCO FILGÓ.

ACTA

de la sesión extraordinaria del día 23 de Enero de 1913.

(Presidencia del Honorable Diputado Urrutia).

A las 2 p. m. se pasa lista, y contestan los Diputados Arosemena Constantino, Arosemena Arquimedes, Amíl C. Correa, Goytia, García A., Meléndez, Moreno, Quinzada, Pinilla, Sosa, Urrutia y Vázquez L.

A las 2 y 15 p. m. se pasa lista nuevamente y además de los nombrados, contestan los Diputados Alvarado Victor Manuel y Carlos.

Con el quorum reglamentario se abre la sesión. Se da lectura al acta de la sesión del 22, que es aprobada, firmándose la correspondiente al 23 de los corrientes.

Se da cuenta del orden del día, y de conformidad con lo se da lectura al Mensaje número 74 de 1904 y 15 de 1911. Pasa en comisión al Diputado Pinilla con 24 horas de término.

Se abre el primer debate del proyecto de ley sobre protección a la industria de manteguita, margarita, queso y otros productos animales.

Cerrada la discusión, es aprobado, y pasa en comisión al Diputado Moreno con 24 horas de término.

Se da lectura al siguiente informe de comisión de los Diputados Ocaña F., Pinilla y Fernández junto con un proyecto de ley por la cual se reconoce un crédito a favor de la señora Felipa Peralta de Correa.

Entra el señor Secretario de Hacienda y Tesoro.

Se continúa el 2º debate del proyecto de ley sobre tierras baldías e indultadas con el artículo 92. El señor Secretario de Hacienda y Tesoro pide que se discuta y vote inciso por inciso. Aprobada, se puyen en consideración los incisos 1º y 2º, que son aprobados sin modificación.

En consideración el 3º que dice: «Las riberas de los ríos navegables hasta una línea de cincuenta metros paralela al curso regular de las aguas.»

El señor Secretario de Hacienda y Tesoro lo modifica así: «Las riberas de los ríos navegables por embarcaciones mayores hasta una línea trazada a diez metros de la línea de las aguas y paralela a ésta, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo pueda declarar inadjudicables otras porciones mayores para dedicadas a usos públicos.»

Cob esta modificación es aprobado después de cerrada la discusión, y se adopta.

En discusión el 4º que dice: «Los cursos de agua no navegables regularmente, que pueden ser necesarios para las poblaciones.»

El mismo señor Secretario de Hacienda lo modifica así: «Las riberas de los ríos o riachuelos navegables a trechos, por embarcaciones menores, en todo el espacio necesario para esa navegación y en todo cuanto fuere indispensable para el uso de las poblaciones cercanas.»

Parágrafo. Los pequeños cursos de

agua, tales como los riachuelos no navegables y las quebradas, pueden ser comprendidos en las adjudicaciones de tierras, con excepción de los que fueren necesarios para proveer de agua a las poblaciones cercanas.»

Es aprobada esta modificación y adoptada.

Los Ordinales 59, 60, 7º y 8º, son aprobados textualmente.

Los artículos 93 y 94 son aprobados sin modificación, después de cerrada la discusión.

Puesto en consideración de la Asamblea el artículo 95 que dice:

«En las oposiciones a la adjudicación de un terreno, el solicitante podrá pedir que el opositor preste una fianza para responder de los perjuicios que se le causen con la oposición, y el Administrador de Tierras le señalará término para que la preste y fijará la cuantía teniendo en consideración la importancia de la solicitud de adjudicación que hubiere motivado el incidente.»

El Diputado Correa lo modifica así: «En la oposición a la adjudicación de un terreno, el solicitante podrá pedir que el opositor preste una fianza para responder de los perjuicios que se le causen con la oposición, y el Administrador de Tierras le señalará término para que la preste, el cual no será menor de diez días, ni mayor de quince, y fijará la cuantía teniendo en consideración la importancia de la solicitud de adjudicación que hubiere motivado el incidente.»

Cerrada la discusión, es aprobado así modificado, y se adopta.

El artículo 96 es aprobado.

El 97 que dice: «Los honorarios de los peritos en las actuaciones de adjudicación de tierras y los costos de la mensura son de cargo de los solicitantes. También pagarán éstos una suma por honorarios del Agrimensor, que será fijada de conformidad con una tarifa que establezca el Poder Ejecutivo y de la cual suma la mitad le corresponderá al Agrimensor y la mitad al Tesoro Público.»

El señor Secretario de Hacienda y Tesoro lo modifica supresivamente así:

«Los honorarios de los peritos en las actuaciones de adjudicación de tierras y los costos de la mensura, son de cargo de los solicitantes. También pagarán éstos una suma por honorarios del Agrimensor, que será fijada de conformidad con una tarifa que establezca el Poder Ejecutivo.»

Es aprobado y adoptado.

En consideración el artículo 98 que dice:

«Además de los Agrimensores Oficiales que gozan de sueldos pagados del Tesoro Público, el Poder Ejecutivo podrá invertir de carácter oficial a otros Agrimensores, que no gozarán de sueldo y que recibirán por toda remuneración los honorarios que convengan con los interesados, siempre que el arreglo sea hecho con conocimiento del Administrador de Tierras.»

Cerrada la discusión es aprobado y se adopta.

El artículo 99 es aprobado.

Puesto en debate el artículo 100 que dice:

«Todo acto de ese género será considerado como una usurpación del dominio público, y las autoridades de policía tienen el deber de destruir las cercas y de impedir el uso indebido de las tierras. Además se le impondrá al contraventor una multa de dos a cinco balboas.»

«Estas medidas podrán ser adoptadas y las penas impuestas por los Administradores de Tierras o por los Alcaldes de Distrito, a prevención.»

El señor Secretario de Hacienda y Tesoro modifica el segundo aparte así:

«Estas medidas serán adoptadas y las penas impuestas por los Administradores de Tierras o por los Alcaldes de Distrito, a prevención.»

Así modificado se aprueba y adopta.

En consideración el artículo 101 que dice:

«Las adjudicaciones de tierras baldías e indultadas contiguas a las vías de comunicación existentes, ya sean terrestres o marítimas o a la línea de las que se proyecten, no podrán tener un frente mayor de la cuarta parte de su fondo, salvo el caso de que se trate de pequeños terrenos rodeados de aguas fluviales que le den forma de península, o de aquéllos comunicados con el nombre de isletas.»

Se exceptúan también las adjudicaciones a los Municipios para áreas y ejidos.

El señor Secretario de Hacienda y Tesoro lo modifica aditivamente así:

«Quedan exceptuados de esta disposición los que conforme al artículo 17 de esta ley tienen derecho a adquirir el dominio pleno de los terrenos que ocupan.»

Así modificado es aprobado y adoptado.

El artículo 102 es aprobado sin modificación.

En consideración el artículo 103 que dice:

«En todos los títulos de propiedad que se expidan sobre tierras baldías e indultadas, se incluirá la condición expresa de que la Nación tiene derecho de expropiación ni indemnización alguna, a la servidumbre de tránsito necesaria para la construcción de vías férreas, tranvías, caminos carreteros y caminos de herradura, líneas telegráficas y telefónicas, y al uso de los terrenos indispensables para la construcción de puentes y de muelles.»

El señor Secretario de Hacienda y Tesoro lo modifica aditivamente así:

«Siempre que la explotación de dichas vías o obras sea por cuenta de la Nación y no de empresarios particulares.»

Cerrada la discusión, es aprobado y adoptado.

El artículo 104 es aprobado.

En consideración el artículo 105 que dice:

«El Poder Ejecutivo queda facultado para complementar esta Ley, si en la práctica resultare que es deficiente en materia de tramitación o si se observaren en ella vacíos o dudas que puedan llevarse o aclararse sin desvirtuar la sustancia de sus disposiciones fundamentales.»

El señor Secretario de Hacienda y Tesoro lo modifica aditivamente así:

«El Poder Ejecutivo quedará facultado para complementar esta Ley, si en la práctica resultare que es deficiente en materia de tramitación o si se observaren en ella vacíos o dudas que puedan llevarse o aclararse sin desvirtuar la sustancia de sus disposiciones fundamentales.»

Es aprobado con esta modificación después de cerrada la discusión, y se adopta.

El mismo Secretario de Estado presenta los siguientes artículos nuevos:

«(106) Los individuos o compañías que hayan obtenido títulos provisionales de adjudicación de tierras de conformidad con las leyes 19 de 1907 y 3º de 1909, pueden pedir la expedición del título definitivo tan pronto como esta ley entre en vigor, pagando la suma que les corresponda según el resultado del mismo título provisional.»

«(107) Las solicitudes de tierras baldías e indultadas en las cuales se haya resuelto ya la adjudicación del terreno cuando esta ley comience a regir, serán respetadas y los títulos se expedirán confirmando el pleno dominio a los solicitantes, mediante el pago total del precio conforme a la ley anterior.

Las solicitudes en que no se haya decretado todavía la adjudicación, se sujetarán por completo a las prescripciones de esta ley.»

«(108) Las solicitudes pendientes de títulos de plena propiedad, hechas en virtud del derecho conferido por el artículo 5º de la Ley 3º de 1909, si se encontraren en el estado de haberse las mensuras y no se hubieren verificado éstas por motivos independientes de la voluntad de los solicitantes, se registrarán por la ley anterior en el relativo al pago de honorarios de los agrimensores, y en consecuencia los interesados no estarán sujetos a pagar la tarifa que se establezca para ese servicio, de acuerdo con esta ley.»

«(109) Las personas que conforme al artículo 17 de esta ley tienen derecho a que se les expida el título de

plena propiedad de las tierras que ocupen, pueden hacer sus solicitudes tan pronto como la ley sea promulgada, sin esperar requerimiento de la Comisión de Tierras ni la formación del plano oficial del respectivo Distrito.

«(110) Cuando la Comisión de Tierras y el Administrador Provincial no puedan atender por sí solos a los trabajos que se les asignen en su respectiva Provincia, el Poder Ejecutivo podrá crear otras Administraciones de Tierras con el personal de cada una de las actuales, por el tiempo que fuere indispensable, y le señalará la jurisdicción que les corresponda.

En cada una de ellas se instalará la Comisión de Tierras en la forma establecida en esta ley, y los nuevos Administradores desempeñarán todas las funciones y ejercerán todas las atribuciones de los Administradores Provinciales.

Después de sustentados por su autor, son aprobados, y se adoptan.

El Diputado Quinzada pide la palabra, y presenta el siguiente artículo:

«(111) La información de testigos que acredite que la ocupación fue anterior a la Ley 70 de 1904, constituya también título de posesión usufructuaria para los efectos del artículo 9º de esta ley.»

En consideración, la sustenta explicando las razones que ha tenido para presentar este artículo.

El señor Secretario de Hacienda y Tesoro se manifiesta favorable al artículo propuesto por el Diputado Quinzada.

Cerrada la discusión, es aprobado y se adopta.

En consideración el artículo último del proyecto original (112) que dice:

«Quedan totalmente derogadas las siguientes leyes:

La Ley 3º de 1909, sobre tierras indultadas.

La Ley 11 de 1911, «por la cual se reforma la Ley 3º de 1909.»

La Ley 12 de 1911, «por la cual se reforma la Ley 19 de 1907.»

Cerrada la discusión, resulta aprobado y adoptado.

Agotada la parte dispositiva del proyecto, el Diputado Henríquez propone:

«Reconsiderarse el artículo 94.»

La sustenta.

El Secretario de Hacienda considera correcta la proposición del Diputado Henríquez, que es aprobada una vez cerrada la discusión, y en consecuencia se reconsidera el artículo 94, que dice:

«Los Decretos que el Poder Ejecutivo dicte declarando inadjudicables ciertas tierras, deberán llevar las firmas de todos los miembros del Consejo de Gabinete.»

El Diputado Henríquez lo modifica aditivamente así:

«El Poder Ejecutivo de la Asamblea en sus sesiones inmediatas, ordinarias o extraordinarias, con copia de esos Decretos y con una exposición de motivos, en cada caso.»

Es aprobado y adoptado después de cerrada la discusión, así como el título.

El señor Secretario de Hacienda y Tesoro pide no se cierre el segundo debate, porque este proyecto es de tal importancia que debe ser estudiado minuciosamente por la comisión a quien se le pase con ese objeto, y sin cerrarse el debate, pasa en comisión al Diputado Justinián.

Se continúa el segundo debate del proyecto de ley sobre sueldos y asignaciones con el artículo 31 que dice:

Secretaría de Hacienda y Tesoro.

«Los sueldos de los empleados de esta Secretaría serán:

Parágrafo 1º El del Secretario, cuatrocientos balboas.

Parágrafo 2º El del Subsecretario, doscientos balboas.

Parágrafo 3º El del Jefe de la Sección de Contabilidad, ciento setenta y cinco balboas.

Parágrafo 4º El del Subjefe, ciento cincuenta balboas.

Parágrafo 5º El del Contabilista que lleva el

libro de reconocimientos, ciento veinte y cinco balboas.....	125.00
Parágrafo 6º Los de los Contabilistas auxiliares, cien balboas.....	100.00
Parágrafo 7º Los de los Jefes de Sección, ciento diez balboas.....	110.00
Parágrafo 8º Los de los Oficiales Primeros, noventa balboas.....	90.00
Parágrafo 9º Los de los Oficiales Segundos, setenta y cinco balboas.....	75.00
Parágrafo 10. Los de los Oficiales Terceros, sesenta y dos balboas con cincuenta centésimos.....	62.50
Parágrafo 11. El del Liquidador Oficial, ciento veinte y cinco balboas.....	125.00
Parágrafo 12. Los Porteros, treinta balboas.....	30.00
El señor Secretario de Hacienda y Tesoro lo sustituye así:	
Artículo 51. Los sueldos mensuales de los empleados de esta Secretaría serán:	
Parágrafo 1º El del Secretario, cuatrocientos balboas.....	400.00
Parágrafo 2º El del Subsecretario, doscientos balboas.....	200.00
Parágrafo 3º El del Contabilista Nacional, ciento setenta y cinco balboas.....	175.00
Parágrafo 4º El del Subjefe de la Contabilidad, ciento cincuenta balboas.....	150.00
Parágrafo 5º El de un Contabilista que lleva el libro de reconocimientos, ciento veinte y cinco balboas.....	125.00
Parágrafo 6º El del Primer Contabilista auxiliar, ciento diez balboas.....	110.00
Parágrafo 7º El del Segundo Contabilista auxiliar, cien balboas.....	100.00
Parágrafo 8º El del Tercer Contabilista auxiliar, noventa balboas.....	90.00
Parágrafo 9º El de un Auditor, ciento treinta balboas.....	130.00
Parágrafo 10. El de los Jefes de Sección, ciento diez balboas.....	110.00
Parágrafo 11. El de los Oficiales Primeros, ochenta y siete balboas con cincuenta centésimos.....	87.50
Parágrafo 12. El de los Oficiales Segundos, setenta y cinco balboas.....	75.00
Parágrafo 13. El de los Oficiales Terceros, sesenta y dos balboas con cincuenta centésimos.....	62.00
Parágrafo 14. El de los Porteros, treinta y cinco balboas.....	35.00

En consideración, lo sustenta manifestando que la Sección de Contabilidad es de las más importantes que hay en el país; que en cualquier momento se puede saber la inversión de las rentas nacionales que los Porteros de todas las Oficinas públicas han elevado un memorial al señor Presidente de la República pidiendo que se les aumente sueldo; y que se considera que el aumento es equitativo, y en consecuencia pide a la Asamblea el aumento de los sueldos de esos empleados.

Cerrada la discusión, se somete a votación secreta con los escrutadores Diputados Alzamora y Arce, quienes informan que ha sido aprobado por 21 bolas blancas contra 3 negras.

Al adoptarse, el Diputado Justiniani lo modifica así:

«El de los Oficiales Primeros, noventa balboas... B 90.00»

En votación secreta es aprobado por 20 bolas blancas contra 3 negras con los mismos escrutadores.

Entre el señor Secretario de Relaciones Exteriores.

El Diputado Herrera propone:

«Reconsiderarse los parágrafos 9º del artículo 2º, 9º del artículo 7º, y 5º del artículo 44.»

Puesta en consideración, lo sustenta y explica la causa de haber hecho esta proposición.

El Diputado Henríquez la modifica así:

«Reconsiderarse los sueldos fijados a los Porteros de la Secretaría de la Asamblea, de la Presidencia de la República, Secretaría de Gobierno y Justicia, Gobernaciones de Panamá, Colón y Bocas del Toro, de la Administración General de Correos y Aduanas, de la Dirección General de Telégrafos, de la Procuraduría General de la Nación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.»

En consideración, lo sustenta recomendando que la justicia debe hacerse en general.

Es aprobada cerrada la discusión, y al adoptarse los Diputados Henríquez y Sosa la adicionan así:

«Los sueldos de los Porteros a que se refiere la anterior proposición serán de treinta y cinco balboas (B. 35.00) cada uno, y así lo tendrá en cuenta la Comisión de redacción y revisión.»

En discusión, lo sustenta el Diputado Henríquez y dice que para abreviar trabajo es mejor en la forma que lo ha hecho por que él cree que el objeto de la Asamblea es aumentar el sueldo de los Porteros.

Con los mismos escrutadores se abre la votación, y éstos informan de que se halla vencida por exceso de bolas al número de votantes; se abre de nuevo, y se obtiene el mismo resultado, por lo cual la Presidencia dispone se verifique la votación en la urna sonora. Así se hace y cerrada, los mismos escrutadores informan que ha sido aprobado por 16 bolas blancas contra 5 negras, y se adopta.

El artículo 52 es retirado del debate por la Presidencia.

En consideración el artículo 53 que dice:

TESORERÍA GENERAL

«Los sueldos de los empleados de esta Oficina serán:

Parágrafo 1º El del Tesoro General, doscientos cincuenta balboas..... B 250.00

Parágrafo 2º El del Cajero Jefe, doscientos balboas..... 200.00

Parágrafo 3º El del Primer Ayudante del Cajero, ciento cincuenta balboas..... 150.00

Parágrafo 4º El del Segundo Ayudante del Cajero, ciento cincuenta balboas..... 150.00

Parágrafo 5º El del Tenedor de Libros, ciento cincuenta balboas..... 150.00

Parágrafo 6º El del Primer Liquidador de Impuestos, ciento treinta y siete balboas..... 137.50

Parágrafo 7º El del Segundo Liquidador de Impuestos, ciento veinte balboas..... 120.00

Parágrafo 8º El del Tercer Liquidador de Impuestos, ciento diez balboas..... 110.00

Parágrafo 9º El del Primer Recaudador de Impuestos, ciento diez balboas..... 110.00

Parágrafo 10. El del Segundo Recaudador de Impuestos, cien balboas..... 100.00

Parágrafo 11. El del Escribiente, noventa balboas..... 90.00

Parágrafo 12. Los de los Porteros, treinta balboas..... 30.00

El Diputado Justiniani lo modifica así:

«El del Tesoro General, doscientos veinte y cinco balboas..... B 225.00

El del Cajero Jefe, doscientos balboas..... 200.00

El del Primer Ayudante del Cajero, ciento cincuenta balboas..... 150.00

El del Segundo Ayudante, ciento veinte y cinco..... 125.00

El del Tenedor de Libros, ciento cincuenta balboas..... 150.00

El del Primer Liquidador de Impuestos, ciento treinta y siete balboas..... 137.50

El del Segundo Liquidador, ciento veinte balboas..... 120.00

El del Tercer Liquidador, ciento diez balboas..... 110.00

El del Primer Recaudador de Impuestos, ciento

doce balboas con cincuenta centésimos..... 112.50

El del Segundo Recaudador de Impuestos, cien balboas..... 100.00

El del Primer Escribiente, setenta y cinco balboas..... 75.00

El del Segundo Escribiente, sesenta balboas..... 60.00

El de los Porteros, treinta y cinco balboas..... 35.00

En consideración, manifiesta que la Comisión que formuló el proyecto creyó conveniente suprimir algunos empleos en esa oficina, pero que por informes que ha obtenido de los Jefes de ella está, enterado de que son indispensables, y pide a la Asamblea le dispense, y dé voto afirmativo a su modificación.

El Diputado Henríquez manifiesta que desea saber qué diferencia existe entre los Liquidadores de Impuestos y que las responsabilidades que pesa sobre el Cajero no está bien remunerado el Cajero no está bien remunerado.

Los Diputados nombrados informan las obligaciones que tiene cada uno de los Liquidadores a que se hace referencia.

Entre el señor Secretario de Gobierno y Justicia.

Con los escrutadores Carles y Correa se abre la votación después de cerrada la discusión, y éstos informan que es aprobado por 15 bolas blancas contra 4 negras.

Al adoptarse el Diputado Henríquez lo submodifica así:

«Tesorero General, doscientos setenta y cinco balboas..... B 275.00

(Primera parte)

Cajero Jefe, doscientos cincuenta balboas..... 250.00

(Segunda parte)

El Ayudante del Cajero, ciento cincuenta balboas..... 150.00

El Tenedor de Libros, ciento cincuenta balboas..... 150.00

Primer Liquidador, ciento treinta y siete balboas con cincuenta centésimos..... 137.50

Segundo Liquidador, ciento veinte balboas..... 120.00

Tercer Liquidador, ciento diez balboas..... 110.00

Primer Recaudador, ciento doce balboas con cincuenta centésimos..... 112.50

Segundo Recaudador, cien balboas..... 100.00

Tercer Recaudador, cien balboas..... 100.00

Escribiente Primero, ochenta balboas..... 80.00

Escribiente Segundo, sesenta y siete balboas con cincuenta centésimos..... 67.50

Los Porteros, treinta y cinco balboas..... 35.00

(Tercera parte)

En consideración la sustenta.

El Diputado Justiniani la combate por razones de economía.

El Diputado Carles combate la modificación, que de nuevo defiende su autor.

Cerrada la discusión, el Diputado Henríquez pide se vote por partes, las que indica. (Véase arriba) Cerrada la votación, es negada la primera parte por 11 negras contra 8 blancas, de que dan cuenta los mismos escrutadores.

La segunda parte también resulta negada con los mismos escrutadores por 9 negras contra 8 blancas. Quedando pendiente la 3ª parte.

En este estado, la Presidencia hace leer una invitación del Centro Español para la romería a Panamá la Vieja, y excita a los Diputados para que concurren a ese acto.

El señor Secretario de Gobierno y Justicia devuelve sancionadas las leyes de 8 y 9 de 1913, por la cual se crean empleos y se suprimen otros, y sobre expendio de ticores embriagantes al por menor, respectivamente.

Se lee un informe de comisión del Diputado Franco arropando el proyecto de ley por el cual se fija el

personal subalterno de la Secretaría de Gobierno y Justicia.

Dejan de concurrir a la sesión, debidamente excusados, los Diputados Alvarado David y Hernández; entraron en el curso de la sesión los Diputados Adames, Alzamora, Franco, Fernández, Henríquez, Herrera, Justiniani, Obaltila Jorandé, Obaltila, Ocasio y Thilia.

A las 5 y 10 p. m. se levanta la sesión.

El Presidente,
CIRIO L. URRIOLA.

El Secretario,
Auto. Alberto Valdés.

Poder Ejecutivo Nacional

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE CAJA

de la Tesorería General de la República.

Existencia anterior..... B	75,812.329
Entradas de hoy.....	11,033.014
Suma.....	86,845.343
Salidas de hoy.....	11,433.434
Existencia para mañana.....	81,221.909

DEMOSTRACIÓN:

Oro Americano..... B	39,237.87
Plata Panameña.....	9,981.37
Monedas de Nickel.....	3,088.09
Agentes Fiscales.....	210.82
Varios Documentos.....	28,712.75
Suma.....	81,239.904

Panamá, 20 de Enero de 1913.
El Cajero,
J. M. Alzamora.

AVISOS OFICIALES

EDICTO

En el juicio ejecutivo que por Jurisdicción conciliva sigue el Banco contra la señora Ernestina Gallot se ha embargado un lote de terreno con dos casas en él construidas, el cual mide treinta metros (30 m.) de frente por treinta metros (30 m.) de fondo. Los linderos son los siguientes: Norte, predio de Remedios Guerra y Teodora de León, hay una callejuela de por medio; Sur, con una faja de tierra, no se sabe de quién es; Oeste, continúa a la huerta del Tivoli; Este, con propiedad de Simona Roldán, Mercedes Meléndez y Francisco Flores y Oeste, con propiedad del jamacano Gabriel Yuli. Estos son los linderos verdaderos, según una vista de ojos practicada sobre el terreno. Los que describen el respectivo título están invertidos. Se exceptúan del embargo la casita de madera y zinc situada hacia la esquina que forman los linderos Norte y Este de la finca, y el terreno sobre el cual está construida porque esa casita y ese terreno pertenecen a los señores Marcelo y Catalina Pérez. También se exceptúa del embargo la bodega situada a la izquierda de la casita mencionada. Dicha bodega fue construida con autorización del anterior dueño de la finca, en el dominio de la finca.

Se cita, pues, a los que se crean con derecho al inmueble embargado para que se presenten a hacerlo valer en juicio de tercera. Con tal objeto se da el presente edicto en lugar público del Banco, por veintidós de Enero de mil novecientos trece.

El Secretario del Banco,
Agustín Costa